

Margarita López Maya

Las insurrecciones de la oposición en 2002 en Venezuela: causas y desafíos¹

1. Preámbulo

La sociedad venezolana vivió entre fines de 2001 y primeros meses de 2003 uno de los períodos más convulsionados de su historia contemporánea. Fracturada en dos bloques políticos poderosos que se enfrentaron continuamente, en dos oportunidades el gobierno del presidente Chávez hubo de afrontar por parte de las fuerzas sociales y políticas que se le oponen, una insurrección de grandes proporciones que puso en peligro su continuidad democrática. El golpe de Estado del 11 de abril y el paro general indefinido con parálisis de la industria petrolera de diciembre de 2002 a febrero de 2003 constituyen dos episodios estrechamente relacionados. En ambos, una significativa porción de venezolanos militares y civiles se sublevaron contra el gobierno, desconociendo su legalidad y legitimidad, mientras otra también significativa porción de venezolanos, igualmente civiles y militares, se movilizaron intensamente e incluso expusieron sus vidas para defenderlo. Para marzo de 2003 el gobierno de Chávez había sobrevivido a estas poderosas insurrecciones.

Entender por qué un gobierno democráticamente electo en 1998 y ratificado en 2000, que incluso en sus primeros 2 años cumplió algunas de las demandas más exigidas por el electorado venezolano en la última década, es repudiado y desconocido por una parte de la población –hasta el extremo de sentirse legítimamente autorizada a usar la violencia para deponerlo– mientras es respetado y amado por otra, es el objetivo de este artículo. Aquí se sostiene que en la Venezuela de fines de 2001 se cristalizó una situación sociopolítica altamente polarizada, que si bien pareció desencadenarse a partir de circunstancias

¹ Este artículo está basado en la ponencia “Insurrecciones de 2002 en Venezuela: causas e implicaciones” presentada en el XXIV Congreso Internacional de LASA celebrado en Dallas, Texas en marzo de 2003. Se ha reformulado para ajustarlo a los requerimientos de este Simposio.

coyunturales, tenía raíces profundas en un conjunto de problemas, algunos de naturaleza histórico-estructural, que la sociedad venía acumulando sin resolver. Esa situación de extrema polarización política fue percibida por las fuerzas de la oposición como una pérdida de legitimidad y piso político por parte del gobierno y un fortalecimiento de sus posiciones y proyecto político. A partir de ese diagnóstico, fuerzas sociales y políticas reunidas en la Coordinadora Democrática (CD) se plantearon una insurrección cívico-militar para derrocar al gobierno y sustituirlo por un gobierno de facto que los representara y sirviera de transición hacia otro gobierno. Aunque la oposición fracasó en su objetivo el 11 de abril, no modificó su diagnóstico ni rectificó en sus estrategias políticas, que serían a lo largo de 2002 fundamentalmente insurreccionales y desembocaron en el paro indefinido de diciembre de 2002 a febrero de 2003, también resultaron en un fracaso para la oposición. Se sostiene que la continuación de una conducta insurreccional por parte de la oposición se debió a otros factores adicionales que impidieron –y siguen impidiendo– que comprenda a cabalidad la naturaleza del conflicto sociopolítico venezolano y en consecuencia, actúe de manera apropiada a alcanzar sus fines políticos de manera democrática. Al final inferimos de esta conducta de la oposición algunos de los desafíos que enfrenta en el futuro inmediato.

El artículo se ha organizado en tres partes. En la primera, se hace una descripción analítica de cómo evolucionaron entre octubre de 2001 y marzo de 2003 las insurrecciones de la oposición venezolana. En la segunda parte, se desarrolla una interpretación sobre las causas que determinaron en las fuerzas de oposición una estrategia insurreccional como salida a la situación política que se percibió como crítica a principios de 2002. En la tercera parte, se complementa esta interpretación con otros aspectos que se hicieron más evidentes después de abril y permiten comprender el fracaso de las estrategias insurreccionales de la oposición hasta febrero de 2003. Se finaliza señalando algunos desafíos políticos que afrontan las fuerzas de oposición en lo inmediato.

2. La evolución de la crisis

Entre fines de 2001 y febrero de 2003 ocurrieron en la sociedad venezolana varias confrontaciones entre gobierno y oposición que pusieron

de manifiesto la existencia de una polarización política extrema, así como su canalización hacia una situación insurreccional contra el gobierno legal y legítimamente constituido por parte de fuerzas sociales y políticas opositoras. Las condiciones propiciadoras de la polarización política venían desarrollándose en los años previos, pero se fueron ahondando en el último cuatrimestre de 2001 siendo un desencadenante importante las acusaciones de autoritarismo y agresión verbal que la oposición hacía de manera creciente contra el presidente y su gobierno, a propósito de la aprobación de un conjunto de leyes, algunas medulares de su proyecto político, mediante el recurso constitucional de la Ley Habilitante. En diciembre de 2001 la confrontación desembocó en un paro cívico, el primero de cuatro, que fue respondido con un endurecimiento del discurso presidencial y amenazas de dirigentes del partido de gobierno al orden democrático. A partir de entonces la polarización y confrontación se hizo más intensa desembocando en el segundo paro cívico, en abril de 2002, que sirvió de antesala al golpe de Estado del día 11. Con este golpe de Estado y el retorno de Chávez al poder 48 horas después, se reveló la hondura de la fractura sociopolítica venezolana y se ahondó la crisis política. Las iniciativas de diálogo, negociación o acuerdos que en los meses siguientes se intentan, no producen resultados significativos. Ese diciembre se arribó de nuevo a un impasse entre los dos bloques, que llevó a la oposición a organizar un cuarto paro cívico, que al igual que en abril desembocará en una situación insurreccional. Para mediados de febrero de 2003 se hizo claro que el gobierno de Chávez había logrado sobrevivir a la huelga petrolera y ganaba control sobre la industria. Para marzo la oposición había levantado el paro.

2.1 Diciembre 2001: el primer paro cívico²

El paro cívico del 10 de diciembre de 2001, convocado por la máxima representación patronal del país, la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (Fedecámaras), fue el resultado del creciente enfrentamiento de distintos grupos empresariales con el gobierno de Chávez. El descontento de empresarios y comerciantes se había venido manifestando desde el inicio de la gestión gubernamental, pero fue ese año que se cohesionaría como fuerza política opositora por la forma, ade-

2 El desarrollo de esta parte es una versión resumida de López Maya (2002a).

más de los contenidos, cómo el Ejecutivo Nacional aprobó 49 leyes. Éstas fueron aprobadas el 12 de noviembre a través del uso de facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo por la Asamblea Nacional por medio de una Ley Habilitante. Fedecámaras argumentó que ellas no habían sido suficientemente consultadas con la sociedad y lesionaban derechos constitucionales, como el de participación, propiedad privada, justicia, libertad, derechos humanos y pluralismo político. Entre las leyes más criticadas por los empresarios estaban las leyes de Tierras, Pesca e Hidrocarburos, que sin duda afectan intereses de estos sectores. Propietarios de tierras rurales y empresarios de la pesca industrial venían movilizándose desde septiembre de ese año, y recibieron hacia octubre el respaldo de la máxima representación empresarial.

El paro del 10 de diciembre no sólo paralizó de manera significativa las actividades comerciales del país urbano, sino que también cohesionó por primera vez las distintas fuerzas organizadas de la oposición, incluyendo sectores gremiales, sectores medios de diversa naturaleza, pequeños partidos políticos emergentes, viejos partidos venidos a menos como Acción Democrática (AD) y Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente), y algunos intereses sindicales tradicionales representados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), todos ellos descontentos por considerar afectados sus intereses y por el estilo autoritario y pugnaz del gobierno del presidente. Este paro cívico fue el primer éxito que se anotó la oposición en su confrontación contra el gobierno de Chávez y es el punto de partida de un endurecimiento de las posiciones de ambos bandos que desembocará en un segundo paro cívico en abril, esta vez como parte del desarrollo de un golpe de Estado. La oposición reconocería en los meses próximos al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, por su actuación durante este paro, como cabeza de su movimiento.

El gobierno y las fuerzas que lo respaldan, agregadas en los partidos Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT) y otros, reaccionaron ante esta primera demostración de fuerza de la oposición acentuando el discurso y la acción confrontacional, y fortaleciéndose su liderazgo más intransigente. El mismo 10 de diciembre, por ejemplo, el gobierno resolvió trasladar a Caracas los actos conmemorativos del día de la aviación, que estaban pautados para reali-

zarse en la ciudad de Maracay. Buscó con ello hacer sentir su fuerza exhibiendo en el cielo los aviones militares. Asimismo, organizó en Caracas una concentración campesina en la tarde, para celebrar la promulgación de la ley de Tierras. En ambos actos, el presidente se presentó en traje militar, declaró que iba a acelerar la aplicación de las nuevas leyes y amenazó con nuevas resoluciones oficiales para regular actividades privadas. En el MVR se emprendieron acciones contra aquellos de sus parlamentarios que habían propiciado el diálogo con la oposición, pasando sus expedientes al órgano disciplinario del partido. Este endurecimiento de las posiciones del gobierno y su partido, tuvo su contraparte en Fedecámaras y la oposición en general, que en una actitud igualmente intransigente, y desde una posición fortalecida por el éxito del paro cívico, exigieron a partir de entonces la derogación de las 49 leyes sancionadas a través de la Habilitante. Algunos líderes y grupos ya solicitaban la renuncia del presidente. Estas posiciones extremas impedirían en los meses siguientes el diálogo y la negociación política entre las partes en pugna.

2.2 Abril 2002: *segundo paro cívico y golpe de Estado*³

Una continua movilización callejera de lado a lado, es la característica de la dinámica sociopolítica de los primeros meses de 2002 ante el bloqueo de salidas negociadas que se da después del paro cívico de diciembre. Una parte de la oposición maneja desde fines de año la demanda de la renuncia del presidente, otros piden que se impulse a mediano plazo un referendo revocatorio. Corren también insistentemente rumores sobre el descontento en las fuerzas armadas, habiendo señas de que un sector radicalizado de la oposición juega al golpe de Estado. En este contexto se produce en el mes de febrero el conflicto entre el Ejecutivo Nacional y sectores de la gerencia mayor de Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), que será la plataforma que impulsará el segundo paro cívico que desembocará en el episodio del golpe de Estado del 11 de abril.

El conflicto de sectores de la gerencia mayor y ejecutiva de PDVSA tuvo como motivo visible el nombramiento en febrero por parte del Ejecutivo de un nuevo presidente y nueva junta directiva de la empresa. Con Gastón Parra como nuevo presidente de la compañía,

3 En esta parte se toman extractos de López Maya (2002b y 2003a).

eran ya 4 los presidentes que había nombrado el gobierno aparentemente sin lograr sus objetivos de alinear la empresa con la reforma petrolera que venía desarrollando como parte medular de su proyecto político. Sin embargo, el motivo hecho público para el paro no era ese, y no se cuestionó abiertamente el nombramiento de Parra sino el de miembros directivos internos de la compañía. Alegaba la gerencia que estos nombramientos violaban reglas consuetudinarias de la empresa, que otorgaban esos cargos por “méritos”. El argumento de la “meritocracia” para ascender o sentarse en la junta directiva de PDVSA era la reivindicación tras la cual se ocultaba la diferencia más honda entre gobierno y sectores de la gerencia en torno a la política petrolera. En la década anterior, de implementación de orientaciones económicas gubernamentales de naturaleza neoliberal, la gerencia se había independizado de la supervisión estatal y había formulado y desarrollado una política de “apertura petrolera”. Con ella buscó distanciar al país de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), reducir el ingreso fiscal petrolero, propiciar el retorno de los capitales foráneos petroleros y eventualmente llevar a una privatización de la industria. Las leyes de Hidrocarburos Gaseosos de 1999 y de Hidrocarburos de 2001 revirtieron estas tendencias y retomaron una política que podría *grosso modo* caracterizarse como una continuación, actualizada a los nuevos tiempos, de la política nacionalista que a lo largo del siglo XX había desarrollado el Estado venezolano con la industria petrolera.⁴

El paro de actividades administrativas en PDVSA demandando la renuncia de los directores internos de la junta recién nombrados, recibiría en abril el apoyo de la CTV que tomó la iniciativa de convocar el día 9 a un segundo paro cívico de solidaridad con la gerencia de la compañía, que fue ampliamente respaldado e incluso impulsado por Fedecámaras, las diversas organizaciones de oposición y el Episcopado de la iglesia católica.⁵ Aunque menos exitoso que el del 10 de diciembre, el sindicalista Carlos Ortega en nombre de la CTV prorrogó este paro por 24 horas más y el 10 de abril, ante una escasa concentra-

4 Para un estudio a profundidad de la reforma petrolera del gobierno de Chávez, véase Lander (ed.) (2003).

5 La secuencia y detalle del golpe del 11 de abril se basa en la construcción propia de un cronograma del golpe a partir de diversas fuentes hemerográficas e información procedente de distintas páginas web. Ver López Maya (2003a).

ción frente a la sede de la CTV, declaró el paro como “indefinido”, lo que sería entusiastamente apoyado por el resto de las fuerzas opositoras. Esa misma tarde convocaron también a una marcha para el día 11 que se movería del Parque del Este de Caracas hacia una de las sedes de PDVSA, también en el este de la ciudad (PDVSA-Chuao), para mostrar su solidaridad con la gerencia de la industria. Como es sabido, esa marcha, ampliamente convocada por los medios de comunicación, fue multitudinaria y una vez llegada a la sede de PDVSA-Chuao, fue persuadida a seguir hacia el centro de Caracas, a la sede del Palacio Presidencial para “sacar” de allí al presidente Chávez. Esta insurrección civil confrontó en el centro una situación de violencia, cuyo origen a la fecha no ha podido ser aclarado, que arrojó 19 muertos y más de un centenar de heridos. Estos sucesos sirvieron de justificación para la insurrección militar de un sector de oficiales de alto rango, produciéndose un golpe de Estado que depuso por 48 horas al presidente.

El 13 de abril, instaurado ya un gobierno de facto presidido por el señor Carmona Estanga de Fedecámaras, diversas y nutridas movilizaciones de los sectores populares que apoyaban al presidente derrocado, conjuntamente con una insurrección militar de signo contrario al del día 11, devolvió a Chávez al poder retomándose el hilo constitucional roto por el golpe cívico-militar. A partir de entonces, y a diferencia del 10 de diciembre, el presidente prometió y se avino a bajar el tono de su discurso, pidió disculpas por errores y ofensas y prometió rectificaciones con sus adversarios políticos. En los meses siguientes, los sectores más democráticos del gobierno se fortalecieron y se hizo manifiesto, en efecto, algunos cambios importantes en estilo y conducta: cambios en el gabinete económico colocándose funcionarios con mayor capacidad de comunicación con sectores empresariales, política de rectificación y reconciliación con la gerencia mayor de PDVSA; moderación del discurso presidencial, mayor respeto por los procedimientos institucionales. El presidente no volvió a usar el uniforme militar e invitó al país a personalidades y organismos internacionales que pudieran brindar sus apoyos para ayudar a salir de la crisis política que el golpe había abierto. El vicepresidente, por su parte, tomó la iniciativa de abrir mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

En contraste, las fuerzas de oposición se mantuvieron renuentes al diálogo o la negociación con el gobierno y siguieron centradas en la política de la calle, pidiendo elecciones “ya”, que no está contemplado en la Constitución, y/o la renuncia del presidente. Aunque en un primer momento se halló debilitada políticamente por el retorno del presidente, así como dividida por desavenencias reveladas durante el golpe, entre partidarios y detractores de atajos violentos, no construyó en los meses siguientes una estrategia de clara vocación democrática, que neutralizara sus sectores más radicalizados. Fue sólo en noviembre, tres semanas antes del inicio del cuarto paro cívico, cuando bajo reiteradas presiones de personalidades y organismos internacionales, se avino a sentarse en la Mesa de Negociación y Acuerdos instaurada bajo la facilitación del secretario de la OEA (Organización de Estados Americanos), César Gaviria. Sin embargo, para ese momento, el predominio de los sectores radicalizados y antidemocráticos en la Coordinadora Democrática hacía improbable que un acuerdo político prosperara antes de la nueva medición de fuerzas que prometía el paro, donde la oposición se sentía confiada en salir victoriosa.

2.3 Diciembre: huelga general y paro petrolero⁶

La segunda gran insurrección de este año comienza a fabricarse desde agosto. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a 4 altos oficiales, responsables del golpe de Estado del 11 de abril. Fue ésta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que abrió la puerta para una nueva aventura militar. Para el mundo civil fue señal de que en el país reinaba la impunidad. El 22 de octubre, 14 militares, entre ellos algunos de los absueltos por el TSJ en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en “desobediencia legítima” contra el gobierno y declarando la zona “territorio liberado”. Anunciaron que sólo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno.

En el mismo mes de octubre, luego de una marcha, la CD dio lo que dijo ser un ultimátum a Chávez: si no renunciaba y convocaba a

6 Esta descripción analítica del paro petrolero es una versión resumida de López Maya (2003b).

elecciones la oposición llamaba a un nuevo paro cívico. El presidente hizo caso omiso y la oposición convocó para el 21 de octubre su tercer paro cívico. Aunque este paro fue parcial y menos beligerante que los dos previos, comenzó allí la recta final para desembocar en el paro indefinido y petrolero de diciembre-febrero. A partir de este paro de octubre se sucederían sin cesar una serie de hechos que fueron cargando con violencia la atmósfera del país: la toma de la plaza Altamira por los militares, ya señalada, el día siguiente de este paro; a inicios de noviembre se sucede un encuentro violento en el centro de Caracas entre allegados del gobierno y de la oposición motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD; en esos días se devela también una conspiración al allanar la casa de un ex canciller de AD y encontrarse en ella material preparatorio de un gobierno transitorio; una balacera se produce a mediados de noviembre en la plaza Bolívar de la ciudad motivada por un conflicto policial, donde mueren 3 personas; poco después el Ejecutivo Nacional intervino la Policía Metropolitana y ordenó la salida de la Guardia Nacional a la calle para patrullar la ciudad de Caracas. En noviembre estalla una crisis en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que pone de relieve la politización también de esa institución. El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzará el 4º paro cívico en el lapso de un año.

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba al paro la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante, procediendo a paralizar buena parte de las actividades operativas de la compañía y prácticamente la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina. PDVSA es la compañía más grande de América Latina y corazón de la actividad económica de Venezuela. La mitad del ingreso fiscal venezolano proviene del negocio petrolero. El lunes 9 de diciembre, día en que las fuerzas de la oposición convirtieron el paro en “indefinido” hasta que “caiga” Chávez, en cadena oficial transmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de PDVSA reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. Denunció el paro como un “sabotaje criminal”. Convocó al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la para-

lización. El conflicto petrolero se hizo central y las demás acciones perdieron relevancia.

La paralización de la industria le dio una dimensión profunda a esta insurrección. Más allá del gobierno de Chávez, el conflicto pareció perseguir la quiebra financiera del Estado venezolano. En el caso de tener éxito la gerencia de PDVSA, manteniendo el control de la empresa y forzando la salida del presidente, se convertiría en un actor con poder de veto sobre los gobiernos electos, una empresa por encima del Estado nacional, capaz de imponer su proyecto político a éste y a la sociedad en su conjunto. Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, hacia mediados de enero la evolución del conflicto tendía a favorecer al gobierno; lentamente éste retomaba control sobre la empresa, activaba diferentes operaciones, y anunciaba un proceso de reestructuración de la misma. Hacia mediados de febrero la tendencia de control del gobierno sobre la industria se hizo clara y al finalizar el mes de marzo más de 18.000 gerentes y trabajadores habían sido despedidos por abandono del trabajo y la empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, se había iniciado el proceso de arranque de sus refinerías y se acercaba con pasos firmes hacia su producción normal de barriles diarios. El gobierno había sobrevivido y la oposición levantó el paro.

3. El gobierno de Chávez ¿legítimo?

En un libro clásico de la sociología de Barrington Moore Jr. publicado en 1978, que se titula *La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía*, se explica como toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución o implícitos como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado viola esos límites, se produce indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En Venezuela se ha venido produciendo por más de dos décadas estos sentimientos hacia el gobierno, tanto por parte de sectores populares, como más recientemente por parte de sectores empresariales, gerentes de PDVSA, grupos de clase media y sindicatos tradicionales ¿por qué?

Las reglas de la convivencia social y los límites entre gobernantes y gobernados, cimentados en los pactos constitutivos del sistema democrático venezolano de 1958, permitieron una relativa paz social en Venezuela por cerca de 3 décadas. Pero desde los años 80 esas reglas han venido siendo violentadas por el creciente empobrecimiento y cierre de expectativas de mejora económica y ascenso social que padecen las grandes mayorías de la población. La exclusión y polarización social y cultural, que en nuestras sociedades es un problema histórico, resultado del proceso de colonización, fueron poco superadas por la república nacida de las luchas emancipadoras del siglo XIX. Pero, la democracia resultante del pacto de Punto Fijo, en los años 60, 70 y aún en parte de los años 80 del siglo XX, se legitimó con una promesa de inclusión y justicia social por la vía de la distribución de la renta petrolera y la construcción de un orden democrático. Esta promesa sería explícitamente rota por los gobiernos venezolanos después del Caracazo de 1989, con la aplicación de programas de ajuste y reestructuración económica de naturaleza neoliberal, así como por la sustitución del discurso de inclusión, armonía y unión social del Estado nacional-populista por el del liberalismo individualista (Coronil/Skurski 1991). Por otra parte, ese episodio del Caracazo, con la masiva represión con la que fue resuelto, motivó una toma de conciencia colectiva sobre la ruptura producida. Nunca más los partidos de Punto Fijo pudieron recuperar la legitimidad perdida produciéndose poco después el colapso del sistema de partidos.

A mediados de los años 90, la polarización social va a encontrar expresión política en actores y proyectos también polarizados, que hasta los meses del paro petrolero se mostraban incapaces de reconocerse uno al “otro” como iguales, de respetarse entre sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes, en la lucha por alcanzar el predominio político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive desde los años 90 lo que Gramsci conceptuó como una lucha hegemónica, es decir, una lucha donde actores con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar, recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica, en 1992 y dos veces en el 2002, actores de signo contrario decidieron tirar el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Afortunadamente hasta ahora, ninguno de los dos tuvo éxito.

En 1998, de acuerdo a reglas democráticas establecidas, en elecciones transparentes Chávez, y la alianza de fuerzas conocida como el *Polo Patriótico*, alcanzó el predominio político para gobernar según su proyecto ofrecido en campaña electoral. Se cristalizó entonces la hegemonía del proyecto político llamado bolivariano. Estos mismos actores y su proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el referendo constitucional de 1999 y en elecciones de 2000. Chávez y su alianza política representan principal, aunque no exclusivamente, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que aspiran inclusión y justicia social. El proyecto bolivariano promete la refundación de la república, el desplazamiento de la vieja élite política, la permanencia de un Estado regulador de diversos aspectos de la vida económica y social, la propiedad estatal del petróleo y la universalidad de los derechos sociales entre sus aspectos más centrales. Sus adversarios, con distintos matices e ideologías que se orientan principalmente por la doctrina del liberalismo, han recibido el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el otro polo social, por el momento no hegemónico.

Si bien la polarización política actual tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se alinean, hay sin embargo, factores adicionales que a mi modo de ver han llevado la confrontación legítima a un antagonismo extremo que ha puesto en peligro la posibilidad de una superación democrática de la confrontación. Por una parte, desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno de Chávez alteró reglas de la convivencia social venezolana, en el sentido que le da Moore al término: aprobó leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático; hizo uso de símbolos de fuerza y amenazas para amenazar a la oposición cuando ésta ejercía su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que en los tres primeros años de gobierno de Chávez la represión del Estado a estas movilizaciones fue notoriamente menor a la de gobiernos previos (López Maya 2003c). El presidente recurrió permanentemente, hasta el golpe de abril, a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público; el oficialismo buscó penetrar organizaciones sindicales como la CTV para cooptarlas o ahogar-

las, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección, de mantener la paz social (Ellner 2003).

Muchos de los actores sociales y políticos de la oposición se unificaron en la Coordinadora Democrática y se radicalizaron ante esta conducta gubernamental, convocando a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respaldan. Estos sectores, en medio de su resentimiento, respaldados por medios de comunicación, también polarizados y radicalizados, por encuestas de opinión, la mayoría de las cuales también están polarizadas del lado de la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su posición, se trataba de una insurrección “popular” mayoritaria, por no decir unánime. Según estos grupos el gobierno no tenía ya piso político. Pero, como se hizo patente el 13 de abril y luego a lo largo del resto del año y durante el paro petrolero, esto era un craso error de diagnóstico.

4. Flaquezas y errores de la oposición

En la capacidad que demostró el gobierno para sobreponerse a dificultades de la magnitud de las que le presentaron las fuerzas de la oposición en 2002 y parte de 2003 debe considerarse, entre otros, sus destrezas políticas, su legitimidad y el coraje que en los momentos más difíciles demostraron muchos de sus líderes. Sin embargo, en este ensayo no nos ocuparemos de desarrollar estos aspectos, sino de poner de relieve las flaquezas manifiestas en la estrategia de las fuerzas opositoras para forzar la salida del presidente. Sostendremos que en el fracaso del golpe de Estado y del paro petrolero jugó un papel primordial lo arriba señalado, un diagnóstico errado de la situación del país, de las fuerzas y recursos que sostienen al gobierno y de la propia fuerza que se tenía.

4.1 Falla el diagnóstico de la oposición el 11 de abril

Como ya se ha señalado, las fuerzas que conforman la oposición se trazaron a partir del paro cívico de diciembre de 2001 una estrategia política radicalizada de naturaleza insurreccional. No hubo por parte de ellos después de diciembre de 2001 y hasta el golpe de Estado del

11 de abril la disposición para conversar y negociar políticamente con el gobierno. La lectura política que se hizo del paro cívico –que había sido un éxito total– trajo en las fuerzas opositoras una percepción de fortaleza y conllevó a una actitud cerrada al diálogo, centrada en la exigencia de derogatoria de todas las leyes sancionadas por el Ejecutivo a través de la Ley Habilitante. Asimismo, convenció de las bondades de utilizar una permanente movilización de calle como herramienta para precipitar una salida política rápida que les fuera favorable.

Este estado de cosas, combinado con los sentimientos de indignación moral e injusticia que señalamos en el acápite segundo, llevaron a la oposición a buscar una salida insurreccional. Tanto quienes estaban comprometidos en la conspiración cívico-militar –y venían planificando el golpe de Estado desde hacía meses– como las organizaciones sociales que no formaban parte de ella –pero se movilizaron en la marcha que se desvió de PDVSA-Chuao al Palacio de Miraflores– estaban convencidas de que una salida de fuerza era legítima y les sería favorable. Sin embargo, ese cálculo falló pues el presidente fue repuesto en su cargo apenas 48 horas después gracias a una masiva movilización popular y un contragolpe militar que reflejó un apoyo significativo de Chávez en el pueblo y entre la Fuerza Armada. En este sentido, falló el diagnóstico que argumentaba que el gobierno carecía de apoyos sociales importantes pues los tenía y muy sólidos en los sectores populares y la Fuerza Armada. Una vez hecho esto evidente, sorprende que las fuerzas de oposición persistieran ocho meses después en una salida insurreccional, ¿por qué de nuevo el cálculo favorable a una salida de este tipo?

4.2 Más errores de diagnóstico durante la huelga general

En este segundo fracaso de la oposición persisten un conjunto de estimaciones equivocadas sobre la situación política del país. Se añaden además algunos nuevos ingredientes. Destaquemos éstas en primer lugar:

Las fuerzas de oposición no evaluaron con acierto la capacidad de resistencia económica del Estado venezolano. Este Estado es un Estado petrolero y el gobierno es el legítimo administrador de sus finanzas. Esto significa que disponía de una capacidad de resistir en términos económicos bastante apreciable, aspecto que la dirigencia de la

oposición no evaluó en su justa dimensión. Un análisis que contrastara entre sí las consecuencias económicas para el gobierno y para los diversos sectores sociales de la oposición, a lo largo de un paro insurreccional que podía prolongarse en el tiempo, hubiera puesto de relieve algunas de las fortalezas con que contaba el gobierno para resistir con ventaja sobre sus adversarios privados. El gobierno venezolano dispone no sólo de sus reservas internacionales, tiene el Fondo de Estabilización Macroeconómico para situaciones de contingencia, y ambos estaban holgados de recursos para cuando se produjo la huelga de diciembre. Además, el Estado si bien contaba con un flujo de caja disminuido, mantenía un cierto flujo. En contraste, los sectores de oposición si bien tenían recursos económicos poderosos también, habían parado sus comercios y sus industrias; se estaban comiendo sus ahorros y además cada día que pasaba en paro general significaba la quiebra de pequeños empresarios y comerciantes, con lo cual debilitaban sus bases de apoyo. Las escasas previsiones de la dirigencia opositora, que creía que al paralizar la industria petrolera por una, o a lo sumo por dos semanas, provocaría una catástrofe económica al gobierno que lo forzaría a renunciar, si bien podía ser un escenario probable, a todas luces no era el único. ¿Y si el paro pasaba las dos semanas? ¿Quién tenía más capacidad de resistencia, el gobierno o la oposición? Aparentemente nadie entre el liderazgo se hizo seriamente esa pregunta crucial.

En segundo término, tampoco midieron las consecuencias políticas del paro general y petrolero en ciertos sectores e instituciones nacionales, de manera muy importante en la Fuerza Armada. Esto es aún más sorprendente si se toma en cuenta el comportamiento de la institución en abril y la reorganización que desde entonces el presidente hizo entre los oficiales de alto rango. Un ataque insurreccional contra el gobierno, que se centrara fundamentalmente en las finanzas del Estado, como era el caso, acabó cohesionando más que antes a la institución militar en torno a Chávez. Porque el paro petrolero de tener éxito iba a mermar significativamente las bases económicas del Estado nación con lo cual pondría en lo inmediato en peligro su capacidad de soberanía. La FFAA, como garante de la soberanía nacional no tenía que pronunciarse a favor del gobierno de Chávez en esta aguda contienda. Le bastaba con tomar la posición institucional de defender la soberanía nacional, cosa que hizo diligentemente una vez que el

gobierno le ordenó tomar las instalaciones petroleras para defenderlas contra las fuerzas de la oposición que las ponían en riesgo de daños o destrucción.

En tercer término, una insurrección al margen de la Constitución y las leyes, tampoco puede ser recibida con beneplácito por Estados nacionales del mundo, que si lo aplauden hoy, mañana les puede pasar lo mismo, que se les subleve una transnacional ubicada en su territorio. Tampoco organizaciones y agencias internacionales podían ver esta acción con buenos ojos, porque el gobierno de Chávez es legal y legítimo. Ya la posición de los países de la OEA en abril demostró lo complejo que es conseguir el reconocimiento internacional cuando se usan vías insurreccionales como éstas de la oposición. Los EE. UU. por otra parte, después de sus torpezas de abril y con el conflicto iraquí encima, se movían con más cuidado en su relación con el gobierno de Venezuela. La oposición debió evaluar las pocas simpatías y apoyos internacionales que una acción como ésta podía tener. Pero también las desestimó.

En cuarto lugar, el liderazgo de oposición no pareció evaluar la posibilidad de que el presidente Chávez no renunciara. No parece haber sopesado el grado de compromiso del gobierno con la reforma petrolera que venía adelantando desde que ganara la primera vez en 1999. Si bien es cierto que el gobierno se orientó después del golpe del 11 de abril por una estrategia de rectificación y reconciliación con la gerencia de la industria petrolera, no había dado ninguna señal que permitiese pensar que bajo presión estaría dispuesto a sacrificar o negociar su reforma petrolera. Al contrario, el presidente nombrado en PDVSA, Alí Rodríguez, es responsable y autor principal de la ley de Hidrocarburos de 2001. El compromiso de Chávez, de su gabinete y de sus aliados políticos con esa reforma se hizo más fuerte después de abril por la difusión de todo tipo de información sobre lo que Venezuela se jugaba como país petrolero de caer Chávez. El comportamiento del gobierno de EE. UU. en el golpe de abril y sus vínculos con el capital petrolero internacional también ayudaron a esa mayor conciencia. De manera que la oposición debió evaluar la cerrada resistencia que presentaría el gobierno ante la amenaza a una de las políticas medulares de su proyecto político. Sin embargo, no lo hizo.

Finalmente, una de las fallas más importantes, es la reiterada incapacidad que ha demostrado el liderazgo de la oposición para reconocer

y tratar de comprender el poderoso respaldo que el presidente Chávez tiene en los sectores populares. Así como Chávez fue devuelto al poder el 13 de abril por impresionantes manifestaciones civiles que impulsaron y acompañaron a los sectores militares que desconocieron el gobierno de facto de Carmona, en diciembre y enero, al llamado del gobierno y del presidente de PDVSA, también masivas movilizaciones rodearon las instalaciones de la industria y los centros de distribución interna de gasolina y gas para presionar a la gerencia a levantar la paralización de la industria. Entre las numerosas otras iniciativas que se dieron entre las bases que apoyan al gobierno para hacer fracasar la huelga destacaron, por ejemplo, los cientos de miles de firmas que se recogieron entre enero y febrero para apoyar un recurso de amparo introducido en el Tribunal Supremo de Justicia para obligar a los gerentes de PDVSA a reactivar la industria. Otro ejemplo, cuando la empresa de PDVSA, PDV Gas, cerró el gasoducto del oriente del país y obligó a paralizar a las industrias básicas ubicadas en la zona de Guayana: del acero, aluminio, hierro, bauxita, etc. los sindicatos de esas industrias, que se habían opuesto a la huelga general de la CD se movilizaron en masa hasta otra entidad federal, el estado Anzoátegui, para protestar y obligar a la gerencia a abrir las llaves del gasoducto y proveer el gas. Eso lo hicieron 2 veces en diciembre, con lo que evitaron que otro centro estratégico de la economía venezolana se paralizara. Y cómo no resaltar la continua y obediente respuesta de los sectores populares a los llamados del gobierno a tener paciencia, a ir por las vías democráticas, a no usar la violencia pero a estar permanentemente movilizadas. Entre enero y febrero, pese a las significativas penurias materiales y espirituales que el paro estaba acarreando a la población más pobre del país, ésta se mantuvo movilizada con mínimos grados de agresión y violencia. Esta significativa expresión de apoyo nunca ha sido debidamente apreciada por las fuerzas de oposición.

5. Como conclusión: los desafíos de la oposición

Para fines de 2003 la crisis política venezolana seguía sin resolverse y las fuerzas que buscan salidas violentas, si bien debilitadas seguían presentes en el escenario sociopolítico. Si bien la institución electoral fue reconstituida mediante un proceso apegado al Estado de derecho, lo que ha abierto un importantísimo espacio institucional que facilita

el arbitraje político en condiciones democráticas, todavía distintas instituciones de los poderes públicos, como las instancias administradoras de la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado, el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría) se encuentran fuertemente averiadas por la politización y polarización que las han penetrado y las aventuras autoritarias que vivió la sociedad en el 2002. Con el paro petrolero, además, las finanzas del Estado quedaron severamente golpeadas y sólo una acción inteligente y sostenida en el tiempo por parte del gobierno podría recuperarlas en un lapso prudencial.

Desde las fuerzas de la oposición, el fracaso de las insurrecciones pasadas ha llevado a un más visible, y mayor debilitamiento y fragmentación de las fuerzas reunidas en la CD. Si bien esto no es nuevo, las fuerzas de la oposición constituyen un abigarrado y muy diverso abanico de fuerzas sociales y políticas con intereses muy disímiles e ideologías que van de la extrema derecha a la izquierda pasando por todos los matices, lo novedoso es que ciertas organizaciones políticas y sociales han logrado hacer prevalecer la estrategia del referendo revocatorio como la nueva vía para buscar la salida del presidente. La patronal Fedecámaras, la sindical CTV, los medios privados de comunicación, las organizaciones de clase media lideradas por el dirigente vecinal Elías Santana y la organización de la gerencia petrolera, Gente del Petróleo, principales responsables de la estrategia insurreccional del año pasado, han aceptado aparentemente esta estrategia del referendo revocatorio, al menos en el discurso, y junto con ésta, parecen haberle dado más espacios a los partidos políticos de oposición para que alcancen un rol de mayor peso en la CD.

El referendo revocatorio es un derecho constitucional. El artículo 72 que lo consagra estipula su realización cumpliendo los siguientes requisitos:

- a) debe haberse cumplido la mitad del mandato de la autoridad;
- b) a solicitud debe estar respaldada como mínimo por un 20% de firmas de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP);
- c) cuando se haga el escrutinio, el número de electores que se pronuncian a favor de revocar el mandato debe ser superior al número de votantes que eligieron a la autoridad en cuestión;

- d) deben votar por lo menos el 25% de los electores inscritos en el REP; y e) sólo puede hacerse una vez.

Según estas disposiciones, para activar este derecho las fuerzas opositoras deben entregar al CNE más de 2.400.000 firmas de electores inscritos en el REP y para revocar el mandato deben obtenerse más de 3.757.773 votos, pues Chávez ganó con ese número de votos en el 2000. Ambas son cifras altas en términos de electores registrados, lo que implica que la oposición se enfrenta a un desafío político respetable. Necesitará hacer un esfuerzo sostenido y coherente para alcanzar ambas cifras en medio de una situación en la cual está debilitada y dividida. Sin embargo, con poderosos medios de comunicación, diversas organizaciones sociales y políticas a su favor, y un respaldo de importantes sectores de ingresos medios y altos, la meta del revocatorio parece posible. No obstante, siguen despertando serias dudas otros problemas de mayor profundidad que constituyen los desafíos que enfrenta la oposición con los que termino esta ponencia.

Entre los grupos de la oposición se evidencia una crónica ambigüedad de propósitos. En los actuales momentos, por ejemplo, y pese al reiterado discurso a su favor, el entusiasmo por el referendo no es un sentimiento unánimemente compartido. Algunos hasta han llegado a decir que preferirían esperar a las elecciones de 2006. Las encuestas que registran un mayoritario apoyo al revocatorio no son muy confiables por la polarización que las afecta. Por otra parte, la forma en que se manejaron para cumplir con los requisitos constitucionales del revocatorio fue un buen ejemplo de la ineficiencia que produce esta ambigüedad que los expone a un nuevo fracaso y se presta para justificables desconfianzas por parte de las fuerzas del gobierno. Hubo desavenencias en torno al asunto de las firmas a recolectar. Algunas organizaciones sostuvieron que las firmas ya recogidas el pasado febrero en un evento conocido como “el firmazo” eran válidas y sólo debían llevarse al CNE el 20 de agosto para iniciar el proceso. Otros —entre ellos dirigentes de los partidos AD y Primero Justicia, así como abogados constitucionalistas opositores— advirtieron que la pregunta formulada en febrero tenía visos de inconstitucionalidad y que por éste y otros motivos, se iban con seguridad a desencadenar tensiones, apelaciones, complicaciones que arriesgarían a que dichas firmas fueran declaradas ilegales al ser revisadas por un nuevo CNE o la Sala Elec-

toral del TSJ. Si esto ocurriera, habría que recogerlas de nuevo y se habría perdido un tiempo valioso para iniciar el proceso revocatorio, pudiéndose incluso perder sentido el hacerlo, pues la Constitución también estipula que pasados los 4 años de mandato, si se da la falta absoluta del presidente, lo reemplazará por el período faltante el vicepresidente, una autoridad directamente designada por él. ¿Cuál hubiera sido el sentido de sacar a Chávez después del 20 de agosto del 2004, si quien quedará por el período faltante será su vicepresidente? La decisión final que tomó la CD de entregarlas, hace pensar que siguen teniendo mucho poder en el seno de la oposición actores que sólo buscan mantener y/o acentuar situaciones de turbulencia política y polarización para repetir una salida insurreccional.

La ambigüedad de propósitos está estrechamente relacionada con los conflictos que surgen de las disímiles características de las organizaciones que conviven en la CD y sobre todo con la calidad y vocación democrática de aquéllas que han ejercido en distintos momentos del año pasado el liderazgo político. De manera muy obvia, antes que los partidos políticos, han jugado un papel protagónico organizaciones sociales y medios de comunicación que se fueron fortaleciendo en Venezuela en los últimos 20 años como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos. Gracias a la hegemonía del pensamiento neoliberal, y el pobre desempeño de los partidos políticos de modelo de Punto Fijo, este rechazo se convirtió en una especie de sentido común de los venezolanos en los años 80 y 90.

Fedecámaras, la CTV, los medios de comunicación privados, la ex gerencia mayor de PDVSA reunida en Gente de Petróleo y Unipetrol, las diversas organizaciones vecinales de clase media que se autodenominan “sociedad civil” pasaron en este período —y algunos desde antes— a llenar el vacío de representación y mediaciones dejado por el colapso del sistema de partidos tradicional venezolano. Pero, sin duda, carecen de atributos para hacerlo. Estas organizaciones de carácter corporativo y/o social, e inclusive algunos partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como COPEI, tienen un discurso democrático que se agota rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo inicial al golpe de Estado y al paro insurreccional de diciembre. Salvo la CTV, estas son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la

solidaridad social (Lander 1995: 135). Son organizaciones que parten de la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los que no tienen lo que explica que les resulta irrelevante, amenazador o incluso inexistente, las organizaciones populares cuya concepción de ciudadanía no puede sino ser distinta, porque en ellas se trata de luchar por el cambio. Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por estos actores, cuando los ven, no como ciudadanos sino como amenazas a su propiedad y a su seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, etc. para referirse a ellos y las estrategias no democráticas, como la implementación de “planes de contingencia” en algunas urbanizaciones o el plan de defensa activa organizado por la CD como respuesta a un evento organizado por el oficialismo el 23 de enero de 2003 (García-Guadilla 2003). En estas ocasiones, los vecinos de las urbanizaciones de clase media se organizaron para defenderse –incluso con armas– de las “hordas chavistas y los círculos bolivarianos que invadirían sus casas” según rumores propagados insistentemente, entre otros por los militares sublevados en la plaza Altamira.

Este no es el caso de la CTV procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso eleccionario que los llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se ha venido plegando a las concepciones de esta llamada “sociedad civil” y tuvo responsabilidad mayor en estas insurrecciones. En el caso de los partidos, como AD o MAS, con bases doctrinarias social demócratas, fundados para cumplir funciones propiamente políticas como negociar entre diversos intereses para alcanzar acuerdos, reconocer y representar la pluralidad de intereses de una sociedad, buscar mediar estos intereses en el Estado, o construir proyectos de sociedad para la convivencia en la diferencia, el pragmatismo y la mediocridad de su dirigencia actual, además de su poca credibilidad, les han impedido orientar y más bien, al igual que la CTV, se han dejado conducir por los intereses económicamente poderosos del momento.

El resultado de estas carencias es la inexistencia de parte de las fuerzas de oposición de una clara vocación democrática, lo que se expresa en reiteradas estrategias y tácticas políticas que manipulan el discurso institucional mientras algunos de sus grupos siguen intentan-

do salidas violentas. Adicionalmente, hasta la fecha, carecen de una alternativa de gobierno unitaria, que sea creíble y/o viable para sectores que vayan más allá de los que respaldan la actual polarización política. Tampoco existe un liderazgo medianamente reconocido por todos. El proceso revocatorio en los próximos meses, volverá a exacerbar la polarización política y la guerra mediática, con toda la violencia y dificultades económicas que esto nos ha acarreado el año pasado y que ha aminorado ligeramente en los meses intermedios del 2003. Muchos venezolanos nos preguntábamos si valía la pena volver a someternos a una confrontación de estas características cuando no estaba clara la oferta política alternativa que se ofrece y cuando el año 2004 fue un año de elecciones municipales y regionales que arrojaron una importante luz sobre la correlación de fuerzas que existía entre los grupos de la oposición, así como entre esas fuerzas y las del gobierno. Tales elecciones despejaron muchas interrogantes sobre los apoyos políticos de cada quien y sobre todo prepararon mejor a los ciudadanos para elegir en una contienda presidencial donde estaban las ofertas programáticas más claras.

Desafortunadamente, en la oposición siguen persistiendo las emociones, el inmediateismo político, la mediocridad del liderazgo e intereses anti-democráticos en el trazado de sus estrategias políticas. Sin embargo, recientemente, se han visto algunas iniciativas interesantes, que apuntan a darle más visibilidad a las organizaciones políticas y a sus líderes, que se manejen mejor en un campo tan complejo y difícil como es este de la política. La presidente de Fedecámaras declaró en agosto de 2003 que la organización no era un partido político, de manera que no convocaría a la marcha de entrega de las firmas para el revocatorio ante el CNE. Igualmente, ese día, se dio la palabra durante el mitin de cierre a dirigentes de partidos que en otras oportunidades han tenido un papel muy secundario en estas actividades. Por otra parte, la elección de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia, que recibió el reconocimiento por parte de las fuerzas del gobierno y de la oposición, es sin duda uno de los signos más positivos con que cierra el 2003. Son señales que indican que quizás los grupos de la oposición comienzan a procesar sus derrotas y rectificar sus conductas. De esta manera, podemos concluir esperando que esta tendencia se fortalezca para el bien de la democracia y de una sociedad que ha asumido los

altos costos que acarrea una conducción política tanto de gobierno como de oposición que han privilegiado demostraciones de fuerza, confrontaciones violentas por encima del ejercicio de la política.

Bibliografía

- Coronil, Fernando/Skurski, Julie (1991): "Dismembering and Remembering the Nation: The Semantics of Political Violence in Venezuela". En: *Comparative Studies in Society and History*, vol. 33, no. 2, abril, pp. 288-335.
- Ellner, Steve (2003): "Tendencias recientes en el movimiento laboral venezolano: autonomía versus control político". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, no. 3, pp. 159-180.
- García-Guadilla, María Pilar (2003): "Politización y polarización de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la democracia". Ponencia presentada en el XXIV Congreso Internacional de LASA. Dallas, Texas, 27 al 29 de marzo.
- Laclau, Ernesto (1985): "Tesis acerca de la forma hegemónica de la política". En: Labastida Martín del Campo, Julio: *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina*. México, D.F.: Siglo XXI.
- Lander, Edgardo (1995): *Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela*. Caracas: Ediciones de la UCV.
- Lander, Luis E. (ed.) (2003): *Poder y petróleo en Venezuela*. Caracas: Ediciones Faces (UCV)/PDVSA.
- López Maya, Margarita (2002a): "El paro cívico del 10 de diciembre". En: *Nueva Sociedad*, no. 177, enero-febrero, pp. 8-12.
- (2002b): "El golpe de Estado del 11 de abril en Venezuela y sus causas". En: *Sociedad y Economía*, no. 3, octubre, pp. 7-18.
- (2003a): "Venezuela: recuento de una semana fatídica para la democracia". En: *Observatorio Social de América Latina*, no. 7, junio de 2002, pp. 23-26.
- (2003b): "Venezuela después del golpe: una segunda insurgencia". En: Medina, Medófilo/López Maya, Margarita: *Venezuela: confrontación social y polarización política*. Bogotá: Ediciones Aurora.
- (2003c): "Movilización, institucionalidad y legitimidad". En: *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 9, no. 1, pp. 211-228.
- Moore, Barrington (1978): *Injustice. The Social Bases of Obedience and Revolt*. Stanford: Ray Freiman & Company.